



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

MONTI
Laura
Mercede
des

Firmado digitalmente por MONTI Laura Mercedes
Fecha: 2026.03.12 16:02:00 -03'00'

S u p r e m a C o r t e :

-I-

De las actuaciones digitales obrantes en el sistema de consulta de causas *web* del Poder Judicial de la Nación, a las que se referirán las citas siguientes, surge que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia mediante la cual se hizo lugar a la acción declarativa de certeza interpuesta por la Unión Argentina de Rugby (seguidamente, UAR) contra la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos. Dicha demanda, tenía como objeto despejar la incertidumbre derivada del criterio sostenido por el Fisco Nacional en su nota 434/18 respecto de la aplicación de la franquicia consagrada en el art. 19, inc. m), de la ley 11.682 (texto según su similar 12.965) en el impuesto al valor agregado (en adelante, IVA).

Para así decidir, en primer término, la cámara consideró admisible la vía procesal elegida por la accionante (art. 322 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), al considerar que su pretensión no tiene un carácter meramente consultivo, pues -según sostuvo- la actora demuestra un interés serio y suficiente en la declaración de certeza perseguida a fin de "*dilucidar su situación impositiva frente al Fisco Nacional y evitar incurrir en un incumplimiento pasible de sanción*".

Despejado ese aspecto, resaltó que en el caso no se encuentra debatida la vigencia de la ley 12.965 (B.O. 16/04/1947), que introdujo como inc. m) del art. 19 de la ley 11.682 el siguiente precepto: "quedan exentas del pago del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto nacional las asociaciones deportivas y de cultura física y los inmuebles de su propiedad en que funcionan sus campos de deportes, instalaciones inherentes a sus fines y sedes administrativas y/o sociales, siempre que las mismas no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades de mero carácter social priven sobre las deportivas, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo" (el subrayado es propio).

En tal sentido, destacó que ello no solo no fue cuestionado por el Fisco Nacional en las consultas formuladas por la actora sobre el punto, sino que se trata de una posición consolidada a partir de la sanción de la ley 25.920, tal como surge del acta de la reunión del 13 de octubre de 2004 de la "Comisión de Enlace" (fs. 43/44).

Al respecto, sostuvo que los párrafos incorporados por la ley 25.920 al artículo agregado a continuación del art. 7° de la ley del IVA, fijaron el criterio general que cabe aplicar a las nuevas exenciones genéricas que se instituyeran con posterioridad a la entrada en vigencia de aquella ley. Aclaró que, si la exención referente a todo impuesto nacional se encontraba prevista en leyes vigentes a esa fecha, esto es, el 9 de septiembre de 2004, esa franquicia prevalece sobre la ley del gravamen.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Precisó, además, que esta tesitura resulta concordante con la expuesta por V.E., el 14 de abril de 2015, en la causa CSJ 78/2014 (50-A) "*Asociación Mutual Sancor c/ AFIP DGI s/ acción meramente declarativa de derecho*", en el cual se remitió también a lo resuelto en Fallos: 329:4007 ("*Club 20 de Febrero c/ Estado Nacional y/o AFIP s/ acción meramente declarativa - medida cautelar*").

Teniendo ello en cuenta, es decir, que la limitación propiciada por la ley 25.920 no resultaba aplicable a las exenciones genéricas que estuvieran vigentes a su dictado, concluyó que la franquicia prevista en la ley 12.965 (art. 1º, pto. 4) resulta comprensiva del IVA.

Por tales motivos, y en la medida que la accionante es una asociación civil sin fines de lucro "*debidamente constituida e inscripta y dedicada a dirigir y fomentar el juego del rugby en la República Argentina*", la cámara afirmó que la UAR se encuentra exenta de tributar el IVA.

-II-

Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario (fs. 299/316), el que fue concedido en la medida que se encuentra en juego la interpretación y el alcance de normas de naturaleza federal y denegado con respecto a la arbitrariedad atribuida al decisorio apelado (fs. 337/338). Esto motivó que la interesada se presentara en queja por esta causal (CAF 89706/2018/1/RH1), la

que será tratada de manera conjunta con su recurso, por razones de conveniencia y economía procesal.

El Fisco Nacional, en primer lugar, reitera su planteo relativo a la inadmisibilidad de la vía elegida por la parte actora, pues considera que se la ha convalidado sin que exista un acto administrativo que genere consecuencias inmediatas y particularizadas en cabeza de la actora.

Agrega que tal circunstancia no puede ser suplida por la referencia a la nota 434/18, pues dicha actuación fue emitida a partir de la consulta no vinculante realizada por la actora y constituye solamente una opinión propiciada frente al planteo de una situación hipotética. Indica que, en todo caso, la actora debió haber aguardado el dictado de una determinación de oficio o solicitado la exención en sede administrativa y seguir las vías recursivas que prevé la ley 11.683.

En cuanto al fondo de la cuestión debatida, sostiene que lo resuelto por esa Corte en la causa "*Asociación Mutual Sancor c/AFIP DGI S/Acción meramente declarativa*" no resulta aplicable al caso de autos, por cuanto allí se debatieron hechos y normas diferentes a la de este pleito.

En tal sentido refiere que, para gozar de la exención invocada por la accionante, "*no basta con que la firma actora manifieste ser una entidad deportiva, sino que además debe demostrar la ausencia de un fin de lucro*". Sobre el punto, refiere que al admitirse la demanda, su parte fue privada de examinar tal extremo al no haberse efectuado solicitud alguna en sede administrativa.

También señala que en el caso no se ha controvertido que los espectáculos que organiza la UAR "*no eran de carácter*



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

amateur", puesto que intervienen jugadores profesionales rentados y ello impide la aplicación de la franquicia prevista en el art. 7°, inc. h), pto. 11°, de la ley del gravamen.

Sin perjuicio de ello, resalta que por medio de la ley 25.063 se incorporó un artículo a continuación del art. 7° de la ley del IVA, mediante el cual se estableció que no serían de aplicación respecto de los espectáculos de carácter deportivo, las exenciones previstas en el art. 7°, inc. h), pto. 6 de esa última ley, así como las dispuestas por otras leyes nacionales - generales, especiales o estatutarias- que incluyeran taxativa o genéricamente al IVA. Agrega que dicho tratamiento no fue modificado por la reforma introducida en ese precepto por la ley 25.920.

Por último, y al margen de tales consideraciones, sostiene que la exención plasmada en el art. 19, inc. m), de la ley 11.682, no persiguió "*efectos genéricos*", de manera tal de alcanzar también al IVA, sino que pretendió dispensar exclusivamente el impuesto a los réditos entonces vigente. Indica que una interpretación contraria determinaría "*un trato desigual y discriminatorio respecto del resto de los supuestos, y se postula como diametralmente opuesto a los fines explícitamente invocados en el debate parlamentario*".

-III-

Ante todo, cabe recordar es asentada doctrina de V.E. que la demanda declarativa de inconstitucionalidad debe

responder a un "caso", ya que dicho procedimiento no tiene carácter simplemente consultivo, ni importa una indagación meramente especulativa. En efecto, la acción debe tener por finalidad precaver las consecuencias de un acto en ciernes -al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal- y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto (Fallos: 307:1379; 310:606; 311:421; 320:1556 y 325:474, entre otros).

Por ello, ese Tribunal ha exigido que medie: a) actividad administrativa que afecte un interés legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente directo; c) que aquella actividad tenga concreción bastante (Fallos: 307:1379; 325:474 y 327:2529), requisitos que resultan revisables incluso de oficio, porque lo contrario importaría permitir que se contrarie lo preceptuado en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional en cuanto a que la Justicia federal actúa exclusivamente ante "*causas*" sin que le quepa la misión de emitir opiniones en abstracto (Fallos: 322:528, cons. 3°).

Observo que dichos requisitos no se cumplen en el caso bajo examen, en la medida en que no ha existido actividad administrativa suficiente como para poner en tela de juicio el derecho que se invoca. Al respecto, considero que el agravio invocado por la parte actora como fundamento de su acción resulta conjetural e hipotético, ya que no se probó comportamiento de Fisco Nacional configurativo del requisito del preceptivo e ineludible "*acto en ciernes*", que pueda válidamente originar una relación jurídica concreta con la demandada (Fallos: 326:4774; 328:1701).



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Ello es así pues la accionante no ha acompañado elementos que permitan concluir que exista o subsista un reclamo específico del Fisco Nacional (arg. Fallos: 327:2529; 328:1701), puesto que únicamente se ha aportado la respuesta del organismo a una consulta no vinculante formulada en esa sede administrativa, sin que se demuestren los efectos jurídicos que aquella opinión produce, tanto respecto a su parte como del Fisco Nacional (arg. art. 12, dec. 1397/79).

Por todo ello, soy de la opinión que el objeto de este pleito no constituye un "caso contencioso" o "causa" que justifique la intervención del Poder Judicial de la Nación (confr. Fallos: 319:2642; 328:1701 y causa C.626, L.XXXI, "Contreras Hermanos y otros c/ Río Negro, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 19 de agosto de 1999).

Como ha dicho V.E., si bien resulta indudable que la interpretación de normas federales suscita cuestión apta para la apertura del recurso extraordinario cuando la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido adversa a la pretensión fundada por la apelante en normas de dicha categoría (art. 14, inc. 3°, de la ley 48), la procedencia de esa apelación se encuentra liminarmente subordinada a la existencia de un "caso" o "controversia" que determine la jurisdicción de los tribunales federales (Fallos: 308:2147, entre muchos otros).

Por último, es prudente advertir que las razones que me llevan a desechar la consideración de la pretensión deducida con el alcance de una acción dirigida a obtener una sentencia meramente declarativa, en los términos del citado art. 322 CPCCN, no obstan a que la actora, de considerar que le asiste la razón en cuanto a la inteligencia de las normas federales aquí involucradas, pueda eventualmente plantear el asunto por los medios legales idóneos para aventar la falta de certidumbre que alega sobre la procedencia del tributo -arts. 76, 81, 86 y ccdtes. de la ley 11.683- (confr. Fallos: 308:2147, entre otros).

-IV-

Por lo expuesto, considero que no corresponde a los tribunales de justicia de la Nación emitir decisión en estas actuaciones y, por lo tanto, debe dejarse sin efecto la sentencia apelada.

Buenos Aires, de marzo de 2026.